

Huelga general en Argentina en demanda de aumentos salariales y contra el plan económico y la cesantía

BUENOS AIRES, 21 de julio (AP, UPI, AFP y Latin). — Por segunda ocasión en los últimos cinco años de gobierno militar, los trabajadores argentinos realizarán mañana una huelga general contra el plan económico en vigencia, en demanda de aumentos salariales y contra la desocupación. La huelga, en varias provincias, cuenta con el respaldo de los empresarios.

El paro fue dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) informó que no adhería al mismo por considerarlo "inoportuno", ya que esta central negocia con el gobierno la constitución de un ente con participación estatal, empresarial y obrera.

Tanto el Ministerio de Trabajo como el del Interior advirtieron que los promotores de las huelgas pueden ser condenados a diez años de cárcel, y se supo que varios dirigentes sindicales fueron encarcelados ya en distintas provincias. En las últimas 24 horas funcionarios gubernamentales mantuvieron numerosas reuniones con dirigentes de diversos gremios para instarlos a no adherirse al paro.

La Federación Empresarial de la Provincia de Buenos Aires, la más importante del país, adhirió a la medida reclamando una acción oficial para refinanciar las deudas de las empresas.

En México, todos los grupos de exilio argentino convocaron a una concentración que se realizará mañana miércoles a

las 13 horas frente a la embajada de ese país, en Reforma Lomas 1225, "en apoyo a las reivindicaciones antidictatoriales del movimiento obrero en Argentina y en repudio a la dictadura militar y sus proyectos de institucionalización".

En Managua, el secretario general del Partido Peronista Montonero, Mario Firmenich, señaló que "la CGT representa la línea más consecuente del sindicalismo argentino y el paro nacional es un nuevo hito en la lucha del pueblo". Agregó que "independientemente de algunas divergencias ideológicas que pudieran hacerse a algunos de los actuales dirigentes de la CGT, lo más importante es lograr una declaración unitaria y fuerte de lucha contra la dictadura militar".

EL DIA

Reunión de militares argentinos

Continúan las amenazas del gobierno contra los sindicatos paristas de la CGT

(EFE y PL)

BUENOS AIRES, 21 de julio.—La Junta y el Comité Militar analizarán hoy el estado de la mediación papal en el diferendo austral argentino-chileno, dijeron fuentes diplomáticas.

Ambos organismos posiblemente escuchen un informe sobre el tema del canciller Oscar Camillón y del negociador argentino en el Vaticano, Guillermo Moncayo.

Moncayo, quien regresó recientemente a Buenos Aires, entregó un informe el lunes a Camillón.

La Junta integrada por el general Leopoldo Galtieri, el

almirante Armando Lambruschini y el brigadier Omar Graffina —comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, respectivamente— hará hoy su reunión habitual de los martes.

La reunión se convertirá luego en una sesión del comité militar con la incorporación, una hora después, del presidente, general Roberto Viola.

El temario incluirá también, al parecer, la posible participación argentina en una Fuerza de Paz en el Sinaí, tema pendiente de resolución.

Aunque no hay un informe oficial sobre los temas de la reunión, es posible que las máximas autoridades militares consideren nuevamente las medidas de estudio destinadas a alentar la reactivación económica.

Por otra parte, el gobierno militar argentino amenazó con reprimir el paro general de mañana, mientras sigue negociando con el sector sindical Dialogulista que se opone a esa medida convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El Ministerio del Interior anunció en un comunicado, que se han impartido directivas que "contemplan la promoción de las acciones que correspondan a los efectos de la aplicación de las leyes que reprimen los hechos de fuerza que atenten contra la paz y la seguridad interior".

El Ministerio de Trabajo

a su vez advirtió que la medida de fuerza puede dar lugar a la aplicación de las leyes que prohíben las huelgas y otras manifestaciones de protesta gremial, y que prevén penas de hasta 10 años de prisión, despido de los participantes e intervención de sindicatos.

Simultáneamente, ese ministerio prosigue las conversaciones con la "intersectorial", entidad gremial que promueve, con apoyo oficial, una "tregua social" con el empresariado y que se opone al paro general convocado por la CGT.

Al llamar a la huelga, y en referencia a esas negociaciones, la CGT advirtió que "cualquier pacto social que se orqueste a espaldas de los trabajadores resultaría un ingenuo intento de trampear la realidad nacional y sólo profundizará la crisis".

La convocatoria de la CGT ha recibido el apoyo de la mayoría de sus delegaciones regionales en el gran Buenos Aires y el interior del país, así como de la Unión del Personal Civil de la Nación, los estibadores portuarios y del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.

También han expresado su adhesión distintos sectores de los gremios ferroviario, textil, metalúrgico, de la construcción, de los taxistas, de la prensa, de los telefónicos, de los maestros y otros, además de algunos partidos políticos.